



Dirección General de Infancia,
Familia y Fomento de la Natalidad

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y
POLÍTICA SOCIAL

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ELECCION DEL PROCEDIMIENTO, DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y DE LA CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS (30 PLAZAS EN 3 LOTES) POR CONTINGENCIA MIGRATORIA” A ADJUDICAR POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

De acuerdo con el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), la justificación del procedimiento de licitación y de los criterios de adjudicación es la siguiente:

I. JUSTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento elegido para la tramitación del nuevo contrato es el del procedimiento negociado sin publicidad previsto en el artículo 168.b).1º de la ya citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que prevé que se podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento negociado sin la previa publicación de un anuncio de licitación cuando:

“1.º Una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución del contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la tramitación de urgencia regulada en el artículo 119”.

En este sentido, el incremento de la llegada de niños, niñas y adolescentes migrantes sin referente familiar que son acogidos por las Entidades Públicas de Protección a la Infancia de las Comunidades Autónomas, desborda, con frecuencia, la capacidad de acogida y atención a la infancia en situación de vulnerabilidad de estos territorios y multiplica las dificultades para que el sistema de protección a la infancia pueda ofrecer una respuesta adecuada y coordinada basada en el interés superior del menor.

El artículo 2 de la Constitución Española establece el principio de solidaridad interterritorial. De acuerdo al título III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regirán las relaciones interadministrativas los principios de colaboración, cooperación y eficiencia en la gestión.

Para dar respuesta a las diferentes contingencias migratorias que se produzcan se aprobó el Modelo de gestión de contingencias migratorias por Acuerdo de la Conferencia Sectorial de la Infancia y la Adolescencia de 27 de julio de 2022 que prevé la activación de un Plan de Respuesta ante contingencias migratorias que determine las necesidades de traslados entre Comunidades Autónomas.

El Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrado el 30 de septiembre de 2022, ha aprobado y dado su conformidad al **“Plan de respuesta ante crisis migratoria para menores migrantes 2022-2023 y propuesta de distribución territorial de la segunda parte del crédito presupuestario de 20 millones de euros destinado a la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados”**.

El Plan señala que, según la información proporcionada por la Comunidad Autónoma de Canarias y por la Ciudad de Ceuta, **se cumple el requisito de una sobreocupación por encima del 50% de las plazas disponibles con carácter ordinario**. Es decir, el número de menores de edad acogidos representa al menos un 150% de las plazas disponibles en cada sistema de protección y ambas Comunidades han solicitado la activación del Plan de Respuesta.

Por tanto, para el año 2022 se propone activar el sistema de reparto del Plan de Respuesta con un número meta de 400 traslados.

El reparto de fondos para el acogimiento de menores de edad migrantes no acompañados se ha realizado a través de la ponderación de los criterios de población, renta per cápita, tasa de paro, esfuerzo en atención a NNMNA, criterio de dispersión, resultado de la suma de los criterios.

Realizado el ajuste final para la determinación de plazas para las CCAA, **a la Comunidad de Madrid le corresponde la atención de 30 NNAMNA.**

Este compromiso asumido por la Comunidad de Madrid se tiene que realizar de forma inmediata porque ya se han recibido los fondos por parte del Ministerio, por lo que es preciso agilizar la tramitación que se considere adecuada, según los argumentos que pasan a desarrollarse a continuación, para cumplir con el objetivo.

Asimismo, **en el mes de enero de 2023** se ha firmado un Protocolo con la Comunidad de Canarias que sella el compromiso de asunción de la tutela y atención de 30 menores.

Actualmente, hay **274 plazas** para estos menores, distribuidas en las siguientes tipologías de recursos:

- 1 Centro de Primera Acogida (Casa de Campo – 50 plazas).
- 15 pisos tutelados (161 plazas).
- 1 Centro de Adaptación Cultural y Social - CACYS Manzanares (32 plazas).
- 1 Centro para víctimas de trata (5 plazas).
- 1 Centro para menores con dificultades de adaptación sociocultural (26 plazas).

Todo ello, sin perjuicio de que puedan derivarse menores a cualquier recurso del Sistema General de Protección, que alcanza un total de **1.807 plazas**, incluyéndose las anteriores.

Con esta disponibilidad de plazas, se puede atender en un año, un flujo migratorio de menores migrantes que oscile entre 400 y 1.100 menores, dependiendo de los periodos de estancia, que siempre son variables e inciertos.

Teniendo en cuenta los datos de ocupación y que la situación sanitaria y administrativa con Marruecos (cierre de fronteras) se ha normalizado, la tendencia es que cada vez lleguen a nuestra Comunidad Autónoma más menores migrantes del Magreb y del África subsahariana.

Aunque la Comunidad de Madrid, es frecuentemente una **comunidad de tránsito**, ya que muchos de estos menores no concluyen su proyecto migratorio aquí, sino que se dirigen a otros territorios de la península (fundamentalmente, Cataluña y País Vasco) para ir a Francia, Bélgica y Alemania, para reencontrarse con sus familias, el número de “nuevas llegadas de menores” da indicios de la evolución de la cifra que se puede llegar a recibir durante este año, dato valioso para gestionar de forma eficiente las plazas disponibles.

Durante el año 2022 han llegado a nuestra comunidad 2.225 menores frente a los 571 del año 2021 por lo que si la tendencia se mantiene al alza, **será necesario disponer de plazas adicionales a las ya existentes, aparte de las necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones del Acuerdo de la Conferencia Sectorial y del Protocolo suscrito con Canarias.**

A fecha de hoy, se mantiene la proporción de NNAMNAs en recursos especializados, así, de cada 4 menores migrantes, 3 residen en recursos especializados.

Esto conlleva que, a pesar de las plazas creadas, el sistema se puede llegar a tensionar superando el 100 % de ocupación, por lo que quedarían plazas vacantes puntuales, **pero no pisos con su capacidad completa para acoger a menores procedentes de Canarias y Ceuta** y lo adecuado es que estos menores se queden juntos en los mismos recursos.

La capacidad media de plazas en cada piso tutelado es de 10 plazas, siendo 14 plazas la máxima capacidad, pero la mejor atención, por ser más individualizada, se da en los recursos de 10 plazas, **por lo que se requerirían 3 pisos tutelados.**

Para dar una respuesta inmediata al compromiso asumido en Conferencia sectorial y confirmado por la firma de un protocolo con la Comunidad de Canarias, se requiere la puesta a disposición o creación de nuevas plazas.

- La mayoría de los recursos para menores migrantes se han habilitado a través de un Acuerdo Marco, por lo que mediante Orden 2171/2019, de 30 de diciembre, **se adjudicaron 140 plazas**, con un plazo máximo de vigencia de 4 años, a contar desde el día siguiente al de su formalización (31 de enero de 2020), es decir, desde el día 1 de febrero de 2020 hasta 31 de enero 2022 y prorrogado por Orden 1354/2021, de 24 de agosto, formalizándose dicha prórroga en fecha 9 de septiembre de 2021 y que finaliza el día 31 de enero de 2024. Por su parte, los contratos derivados del Acuerdo Marco estarán vigentes hasta el 31 de marzo de 2024.
- Sentado lo anterior y dado el objeto del servicio, **disposición de plazas por un precio**, solo puede encauzarse a través de un contrato administrativo, si bien, en este ámbito puede recurrirse a diversos procedimientos, por lo que dada la premura en el inicio de la atención, **no puede acudir al procedimiento abierto ordinario**, ya que, incluso con la declaración de urgencia, el tiempo de tramitación no permitiría el cumplimiento en un plazo inmediato y por otro lado, ya se ha descartado la ampliación del Acuerdo Marco en 20 plazas adicionales cuyo contrato ha finalizado el 31 de diciembre de 2022, por lo que debe acudir a vías más simplificadas y rápidas, entre las que se encuentran las siguientes:

a) **Procedimiento negociado sin publicidad del artículo 168.b) 1º de la LCSP**, es decir, cuando se dé una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución del contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la tramitación de urgencia regulada en el artículo 119 de la Ley.

b) **Contrato de emergencia** del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público.

El carácter de última ratio del contrato de emergencia y el difícil encaje de los supuestos de hecho concurrentes actualmente, ya que no se podría justificar para la llegada de 30 menores que además han sido aceptados por la propia Comunidad Autónoma receptora frente a una llegada indeterminada de menores que amenazaba con saturar la red de protección, por lo que la mejor opción es la siguiente:

- Recibir grupos de 10 menores y alojarlos en pocos recursos (como mucho, 3 pisos), y para ello no hay recursos disponibles completamente para ello, por lo que deberían habilitarse más plazas, lo que supone iniciar ya la tramitación para crear 30 plazas en lotes de 10 plazas, para que estén operativas a partir del mes de abril del 2023 y después consolidarlas en el nuevo Acuerdo Marco a convocar.

Por tanto, la imprevisibilidad del supuesto de hecho para recurrir a este procedimiento se manifiesta en la incertidumbre en relación con la actual capacidad de ocupación para cumplir los compromisos y ello, derivado de los siguientes indicadores:

El año 2023 se ha iniciado con 357 plazas ocupadas, siendo la ocupación, un dato estructuralmente muy importante, porque refleja con exactitud, el número de plazas que debe disponer una red de protección para atender con holgura, o con apretura, un volumen de personas en un periodo determinado.

Esta es la evolución de la cifra de ocupación en los últimos años, medida de 6 en 6 meses:

01-01-2018	30-06-2018	01-01-2019	30-06-2019	01-01-2020	30-06-2020	01-01-2021	30-06-2021	01-01-2022	30-06-2022	31-12-2022
185	223	418	438	470	453	379	300	361	330	357

Los momentos más críticos de estos años, han estado asociado a los periodos en los que la disponibilidad de **plazas estructurales** aumentaba considerablemente y resulta inevitable invertir, al menos, 6 meses, en la tramitación del expediente contractual.

En Madrid, se puede considerar que una fluctuación de **40 plazas/camas estructurales**, conlleva necesariamente una crisis.

+ 38 → **+ 195** → + 20 → + 32 → - 17 → +26 → + 21 → + 61 → 31 → +27

Hay que tener en cuenta que 40 plazas estructurales, pueden sostener un flujo de atención que oscile entre 50 y 150 menores migrantes en un periodo de un año.

Esto conlleva que, a pesar de las plazas creadas, el sistema se puede llegar a tensionar rozando el 100 % de ocupación, por lo que quedarían plazas vacantes puntuales, **pero no pisos con su capacidad completa para acoger a menores procedentes de Canarias y Ceuta** y lo adecuado es que estos menores se queden juntos en los mismos recursos.

ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA LA CLASIFICACIÓN INICIAL DE OFERTAS Y PARA LA NEGOCIACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO.

1.- CLASIFICACIÓN INICIAL DE OFERTAS.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 de la LCSP, se señalan a continuación los criterios de valoración de las ofertas que han de regir la adjudicación del presente contrato en base a la mejor relación calidad precio.

La puntuación total será de 100 puntos.

A) OFERTA ECONÓMICA: Hasta 49 puntos

Se valorará en este apartado la oferta económica que realicen los licitadores, según la siguiente fórmula:

$$\text{Puntuación} = 49 \times \frac{\text{Baja de licitación de la oferta a considerar}}{\text{Baja de licitación de la oferta más baja}}$$

Baja= Presupuesto de licitación – oferta económica de cada licitador (*Bajas de licitación IVA excluido*)

Las ofertas que no contengan baja en el precio de licitación obtendrán cero puntos.

De acuerdo con la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, no se impone en la normativa de contratación pública ninguna fórmula matemática determinada y que ésta atribuya una puntuación superior a la oferta más barata y menor a la más cara y que se guarde la adecuada proporción en la atribución de puntos a las intermedias, por lo que el órgano de contratación tiene libertad para su fijación, respetando ciertos límites, que son los siguientes:

- Debe atribuir mayor puntuación a la oferta más económica.
- No puede establecer un umbral de saciedad.
- Debe evitar reducir los márgenes entre las ofertas más caras y las más económicas.
- No debe magnificar diferencias económicas mínimas.
- En ningún caso podrá atribuir puntuación a todo licitador por el mero hecho de presentar una oferta.

Como recoge la resolución nº 207/2017 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, de 19 de Julio de 2017, la valoración debe efectuarse sobre la baja que realiza cada proposición respecto del precio de licitación, como en este expediente, así, a mayor baja, mayor puntuación, conforme a una regla de tres simple. De esta forma, se distribuyen los puntos entre las demás ofertas según el ahorro que cada proposición entraña para la Administración y no en cuanto se aleja o aproxima a la que hizo la mejor oferta.

Idéntica posición mantiene el Tribunal de Cuentas al afirmar que: *“carece de justificación no valorar las mayores bajas una vez examinada la capacidad, los medios y la solvencia de las empresas licitadoras”*.

Por tanto, la fórmula propuesta en este expediente, además de ser la que habitualmente aparece en todas las licitaciones de esta Consejería, es la que mejor cumple los requisitos anteriormente comentados, salvaguardando la libre decisión del órgano de contratación sobre el método más justo y proporcional de asignar la puntuación al criterio precio.

B) CRITERIOS DE CALIDAD: hasta 51 puntos.

Se han establecido, dentro de los criterios de adjudicación, una serie de criterios de calidad, que guardan relación con el objeto del contrato, es decir, la atención residencial y la integración de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

El desarrollo de las prestaciones que este contrato conlleva, fundamentalmente, la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, requiere de un alto grado de profesionalización por parte del equipo adscrito al servicio, por lo que se valora positivamente la formación continua en el campo de actuación, que es clave para garantizar una adecuada calidad en la prestación del servicio por parte de estos/as profesionales, a través de una mejora que valore la superación del número horas que debe dedicarse a la formación del equipo profesional, de acuerdo con la cláusula V.2.10) del Pliego de Prescripciones Técnicas

Asimismo, dado que se trata de la prestación de un servicio social, se establecen criterios para incrementar la plantilla que atiende a los menores, para mejorar y actualizar la formación del personal así como fomentar programas que respondan a las necesidades específicas de estos menores a fin de propiciar su integración sociolaboral.

Estos criterios redundarán, sin duda, en una mayor calidad en la prestación del servicio, ya que inciden en el desarrollo profesional, en la mejora de la atención de los usuarios y en su integración en nuestra sociedad.

El desarrollo de estos criterios es el siguiente:

B.1. FORMACIÓN.....hasta 10 puntos.

Se valorarán las propuestas que se comprometan, durante todo el periodo de ejecución del contrato, a mejorar las acciones formativas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas (Cláusula V.2.10).

- Por la realización de dos acciones formativas adicionales al año 10 puntos.
- Por la realización de una acción formativa adicional al año 7 puntos.

El licitador no puede comprometerse simultáneamente a las dos mejoras relacionadas en este apartado. En caso de comprometerse a ambas mejoras, se entenderá que no oferta ninguna de ellas.

Las materias sobre las que puede versar las acciones formativas adicionales, son las siguientes:

- El sistema de protección a la infancia en la Comunidad de Madrid.
- Legislación en materia de protección de menores.

- Los menores migrantes no acompañados y el sistema de protección.
- Análisis y prevención del bullying en los centros de menores.
- Trastornos asociados al consumo de drogas y sustancias estupefacientes.
- La función terapéutica en la intervención socioeducativa. el contexto terapéutico: la compensación, vinculación, confianza, resiliencia y apego.
- La calidad del acogimiento residencial de menores protegidos.
- Pautas de intervención en el tratamiento educativo-terapéutico de menores infractores en medio abierto.
- Herramientas educativas y emocionales: implementación de la inteligencia emocional aplicada en la intervención educativa con menores.
- Recursos específicos de protección: diagnósticos, informes, intervención.
- Las necesidades de la infancia protegida derivadas de la exposición mantenida a malos tratos. el buen trato. el educador como tutor de resiliencia.
- Las figuras implicadas en el acogimiento residencial y la protección infantil. El rol del educador.
- La atención de los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad en el contexto residencial de menores protegidos.
- Mejora de la comunicación para equipos educativos de residencias infantiles.
- La inteligencia emocional como herramienta para evitar el síndrome de burnout en el personal de los centros de menores.
- Nuevas realidades en la intervención con menores protegidos en acogimiento residencial desde la figura del guardador.
- La perspectiva de género en la intervención social con menores. Prevención y detección de la violencia de género y violencia sexual en el ámbito de los centros de menores.
- Las nuevas tecnologías como herramienta de intervención psicoeducativa. riesgos y consecuencias del uso inadecuado de las TIC's.
- Estrategias y criterios para la evaluación en el marco de la justicia juvenil.
- La reinserción social a través de actuaciones transversales de desarrollo personal: educación medioambiental, educación para la salud y el deporte.

-B.2. MEJORAS DE PERSONALhasta 20 puntos.

- Por incluir en la plantilla del centro un trabajador social con jornada completa 10 puntos.
- Por incluir en la plantilla del centro un educador adicional con jornada completa .. 10 puntos.

B.3. PROGRAMAS EDUCATIVOShasta 21 puntos.

- Organizar y ejecutar, a su cargo, un programa de refuerzo del aprendizaje de la lengua castellana y la cultura española realizado por la propia Entidad en sus propias instalaciones de, al menos, 30 horas anuales 7 puntos.
- Organizar y ejecutar, a su cargo, un programa para la adquisición y desarrollo de habilidades sociales realizado por la propia Entidad en sus propias instalaciones de, al menos, 30 horas anuales 7 puntos.
- Organizar y ejecutar, a su cargo, un programa de salud en el que se incluyan la educación afectivo-sexual, así como la prevención en el consumo de drogas realizado por la propia Entidad en sus propias instalaciones de, al menos, 30 horas anuales7 puntos.

Las mejoras ofertadas serán obligatorias y no podrán ser objeto de modificación, en caso de incumplimiento se aplicarán las penalidades establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 169.5 de la LCPS no se negociarán los requisitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco los criterios de adjudicación. De los aspectos económicos y técnicos, indicados anteriormente, se tendrá en consideración a los efectos de la negociación de los términos del contrato únicamente el siguiente:

A. **ECONÓMICO:** Precio plaza ocupada/día.

3. CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DE EMPATES.

En caso de empate entre varias ofertas tras la negociación, se resolverá mediante la aplicación de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de su oferta, de acuerdo con la invitación cursada:

a) Las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial.

b) Las proposiciones presentadas por empresas, que, sin estar obligadas, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicación de esta circunstancia, los licitadores deberán acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social.

c) Las proposiciones presentadas por las empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración.

En la aplicación de estos criterios de desempate, tendrá prioridad la proposición de la entidad que reúna más de una característica de las señaladas en los apartados a), b) y c) de este apartado.

De subsistir el empate entre varias ofertas tras la aplicación del criterio anterior, se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de su oferta, de acuerdo con la invitación cursada:

1. Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla de cada una de las empresas.
 2. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
 3. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
 4. El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
- La documentación acreditativa de los distintos criterios de desempate será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

4.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del mismo, se considera que de los **criterios** establecidos anteriormente, se tomarán en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, los señalados con los números **A** (oferta económica) y **B** (criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas), siendo los límites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia los siguientes:

Opción 1:

- Se obtengan 41 puntos en las mejoras del apartado **B**
- La baja de la oferta económica sea igual o superior en 10 unidades porcentuales a la media de los porcentajes de las bajas de las ofertas.

• **Opción 2:**

- No se obtengan 41 puntos en las mejoras del apartado B
- La baja de la oferta sea igual o superior en 20 unidades porcentuales a la media de los porcentajes de las bajas de las ofertas.

En cualquiera de dichas opciones, para apreciar que una oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, se deben dar ambas circunstancias.

III CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 202.1 de la LCSP, los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del artículo 145, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos.

En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares **de al menos una de las condiciones especiales de ejecución** de entre las que enumera el apartado siguiente.

Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones económicas, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental **o de tipo social**.

Entre las consideraciones de tipo social se podrán contemplar la **promoción del empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través de Empresas de Inserción**; eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo; favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar; combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración.

En consonancia con lo recogido en la Ley de Contratos del Sector Público, el Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la reserva de contratos públicos a favor de ciertas entidades de la economía social y se impulsa la utilización de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública de la Comunidad de Madrid establece la obligatoriedad de establecer, al menos, una condición especial de ejecución relacionada con el objeto y que no sea discriminatoria, que sea proporcionadas y compatible con el derecho comunitario así como no discriminatoria.

Con estas premisas, se ha establecido la siguiente condición de carácter social:

Es condición especial de ejecución que el contratista contrate y adscriba para la ejecución del contrato, al menos, a un trabajador con dificultades de acceso al mercado laboral, de los incluidos en alguno de los colectivos abajo señalados.

Se comprenderán dentro del colectivo con especiales dificultades de acceso al mercado laboral, además de los descritos en el artículo 202.2 de la LCSP (jóvenes, mujeres y parados de larga duración), los comprendidos en el artículo 5.1.a).2º del Acuerdo de 10 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las Normas Reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones del Programa de Incentivos a la Contratación Indefinida (BOCM de 13-07-18), que incluye, entre otros, a personas mayores de cuarenta y cinco años y personas trabajadoras retornadas del extranjero a la Comunidad de Madrid.

Estas obligaciones tendrán la consideración de condición especial en relación con la ejecución del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, con el carácter de obligación contractual esencial, a los efectos establecidos en el artículo 211.1.f) de dicha Ley.

En Madrid, a la fecha de la firma

LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Firmado digitalmente por: VALMAÑA OCHAÍTA SILVIA
Fecha: 2023.03.03 10:48

Fdo.: Silvia Valmaña Ochaíta